

El lunes 13 de julio nos reunimos en la Sala los Presidentes de la sede del Senado en Santiago para discutir sobre los vínculos entre “*Ciencia, Ciudadanía y Experticia en la Evaluación de Impactos Ambientales*”. Allí nos preguntamos si acaso se está llevando o no un diálogo cada vez más nutrido

****PRIMERA PARTE****

La exposición de la Dra. Javiera Barandiarán “*¿Qué rol juega la ciencia en decisiones colectivas en un estado que 'raya la cancha'?*” trató el papel que ha jugado la ciencia en un Estado que ha transitado desde la dictadura a la democracia. Basada en las prácticas de conflictos, vivos aún, tales como la contaminación de Celco en Valdivia, el caso de Pascua Lama, la contaminación del virus ISA e Hidroaysén, Javiera reconoce una peculiaridad en Chile; mientras la ciencia se politiza, el Estado y sus funcionarios se adscriben a una posición de objetividad y neutralidad. Además las interpretaciones acerca del ejercicio de leyes, reglamentos y normas que realizan los funcionarios se asumen como que actuaran a modo jueces y árbitros. Javiera se pregunta por cómo esta interpretación, al más puro estilo jurisdiccional, se aleja de la propia interpretación del Estado como aquel que representa a la ciudadanía y al bien común. En este entendido existirían ciertas características de la ciencia chilena que la supeditan a una idea de ciencia estandarizada, adquirible al mejor postor, en lo posible acotada y que debería dar respuesta a un poder altamente centralizado embestido de neutralidad. Hidroaysén para Javiera representaría el climax de esta lógica.

Sin embargo Javiera también reconoce que la científicidad de la línea base es discutible también. Otro punto importante que ella instaló está referido a los cuestionamientos y los dilemas a los que están expuestos centros de investigación regionales. Junto con mostrar la deriva del CENMA Javiera llamó la atención en la necesidad de institucionalizar centros de investigación, laboratorios, etc. abocados al conocimiento medioambiental para la toma de decisiones públicas. Esto considerando que los sistemas de Evaluación Ambiental que aterrizan en los países, han sido diseñados sobre supuestos acerca de la ciencia y la investigación distintas, más independientes.

Javiera reconoció que si bien existen demandas para tecnificar estos sistemas en Chile, al final estas no terminan cumpliéndose y más bien realizan lo contrario. Dirigidas a los tomadores de decisión pública Javiera planteó algunas preguntas: ¿Qué ha pasado con la idea de realizar guías metodológicas para la EIA con la academia de ciencias de Chile? ¿Qué ha pasado en los ministerios con las normas ambientales? La superintendencia ¿Qué poderes reales tienen?, ¿Cuál es la capacidad de monitoreo real, inspecciones, interpretación de esos datos?

La **candidata a doctora** Colombina Shaeffer, en su presentación “*Ciencia, Política, Expertise y Activismo: El caso del Huemul en Patagonia Sin Represas*”, abordó las distintas formas de entender al huemul en el conflicto sobre HidroAysén en general, enfocándose en la producción del huemul por parte de la campaña ciudadana Patagonia Sin Represas. Comenzó presentando al huemul y describiendo cómo la campaña Patagonia Sin Represas intensificó los atributos políticos del éste para traerlo e incluirlo en su campaña. La escalada de estas prácticas políticas se diversificaron para enfrentar y desafiar el huemul presentado por HidroAysén.

La comprensión del huemul como un ente vivo, y no sólo como un objeto, se resiste a ser representado de una sola forma, por ejemplo, como un impacto ambiental. Así, múltiples huemules emergen de esta controversia y del trabajo de campañas como Patagonia Sin Represas o del proyecto HidroAysén, representando realidades a veces contradictorias que intensifican las propiedades políticas de no humanos como el huemul y de la controversia misma. Es más, este trabajo también implica riesgos que pueden recaer sobre los propios actores interesados (por ejemplo, los activistas o proponentes de proyectos). Esto ilustra el componente generativo de las controversias

socio-técnicas y cómo los actores no humanos también ingresan y participan de la política. Incluir este tipo de enfoques y miradas académicas en el debate público permite pensar de distintas formas la política. Por ejemplo, ingresando otras sensibilidades además de incertidumbres. Con esto último Colombina interpeló a los tomadores de decisión a que comprendan que existen muchas formas en que los impactos ambientales se presentan. Estos impactos, descritos muchas veces como “número de aves”, “especies”, “ejemplares en un territorio determinado”, entre otros, muchas veces son entidades fluidas, que aparecen y desaparecen; son mucho más inciertos que los indicadores estáticos que se presentan en los estudios de base. Colombina siguió al huemul a lo largo del Baker, lo cual le sirvió para mostrar cómo este animal existió de distintas formas, como impacto ambiental, como un conocimiento desafiado, como estrategia y actor político-legal y como patrimonio e identidad nacional. Colombina señaló la falta de atención, desde la política, hacia la vitalidad efectiva de los animales, al representarlos como un “Otro” externo al mundo humano, pero por sobre todo reconoció cuán elusivos y desafiantes a la idea de impacto ambiental, cuán escurridizos y problemáticos puede ser estos actores. Finalmente, Colombina reconoció que para quienes se oponen a grandes proyectos de infraestructura traer al frente a animales carismáticos puede resultar en una buena táctica. Sin embargo, esto no siempre así, ya que estos actores pueden presentar complejidades y contradicciones mayores relacionadas, en el caso del huemul, a estar asociado al turismo de elite.

La **Dra. Gloria Baigorrotegui** en “Diálogo experto-activista en la resistencia contra proyectos de generación eléctrica de base” expuso la contribución de este diálogo en la paralización de los proyectos Barrancones e Hidroaysén. Para ello Gloria describió cómo hace cinco años atrás piezas audiovisuales como Chao Pesca, o la campaña Patagonia Sin represas la introdujeron al rol de las resistencias locales a grandes proyectos e infraestructuras y cuán inesperado era por aquel entonces que estos proyectos terminarían siendo paralizados a pesar de contar con sus Resoluciones de Calificación Ambiental positivas. Seguidamente este diálogo fue seguido a partir de contestar cuatro preguntas: ¿Cuándo y cómo surge este diálogo?, ¿quiénes lo movilizan?, ¿de qué forma se lleva a cabo?, ¿qué resultados entrega? Siguiendo las evidencias de estas dos experiencias conflictivas Baigorrotegui reconoció que las asimetrías comunes entre legos y expertos se ven subvertidas por la práctica de este diálogo. Los activistas invitan a despertar a los científicos y los enrolan y enmarcan los problemas, además profesionales que están entre la administración y el activismo promueven campañas educativas, etc. Los activistas alertan a científicos sobre los problemas medioambientales y se vinculan con conocimientos expertos para resistir proyectos desde el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y más allá. Los supuestos sobre la jerarquía de los científicos y expertos por sobre los legos en las prácticas activistas quedan desdibujados, así como también las tensiones entre lo público y lo privado. Las modalidades consultoría privada o licitaciones públicas pusieron en acción estrategias de acción colectiva articuladas por los grupos de base directamente o indirectamente por medio de ONGs. Aunque Gloria reconoce que a pesar de que no se constatan informes oficiales como resultados de estos diálogos, estos sí influyeron en la paralización de los proyectos, así como también fue crucial el posicionamiento de los Centros de Investigación Regional junto a los expertos sectoriales conocidos en la región.

Ronda de preguntas

Las preguntas en esta ronda se relacionaron con la reticencia por parte de la academia y de ciertas tendencias en la formación de ciertos profesionales a reconocerse no sólo como activistas, sino de enrolarse en investigaciones calificadas de partidarias. Hubo consenso en las respuestas acerca de cómo desde la academia o las instituciones el activismo y el medioambientalismo es algo mal visto e incluso marginado de las líneas de investigación principal. Además se valoró la realización de reuniones y encuentros para acercar ambos mundos con el fin de trabajar hacia el fortalecimiento de estos diálogos de forma más protegida e institucional, tanto para los propios científicos en particular, como para las políticas públicas, en general. Myriam Chiblé comentó la necesidad de apoyarnos mutuamente para fortalecer estas redes, que también replican tensiones en ámbito del empresariado privado en la Patagonia. Valoró el evento así como la conformación de mujeres en la testera.

Frente a la pregunta acerca de hacia dónde nos llevaría este diálogo, las expositoras estuvieron de acuerdo en la necesidad de que las controversias y las discusiones continúen mientras que los conflictos más hostiles disminuyan. Especialmente con el fin de que no se acallen determinados conocimientos y puntos de vistas, ni se vulneren los

derechos fundamentales. Colombina reconoció la importancia de fortalecer los recursos para llevar adelante procesos de participación ciudadana y Javiera alertó en la necesidad de mejorar los entramados más amplios que sostendrían protocolos, sistemas de monitoreo y seguimiento de evaluaciones de impacto, además de mantener equipos idóneos para interpretar estos datos, etc. No sólo la participación ciudadana sería necesaria, sino también el fortalecimiento de todo un sistema de salvaguarda ambiental. Gloria expuso que el trabajo dentro de la academia tampoco favorece, muchas veces, el acercamiento del activismo medioambiental.

Un asistente rescató también las iniciativas ciudadanas para mejorar el conocimiento desde una opción personal.

****SEGUNDA PARTE****

En el coloquio **“Luces y Sombras para el diálogo experto-activista en las controversias tecnoambientales”** los integrantes trabajaron alrededor de las siguientes preguntas:

Para Rajan (2005) los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) pueden ser concebidos como mecanismos violentos del Estado, mientras que para las Naciones Unidas son mecanismos que fortalecen la transparencia y con ello la participación.

- ¿Cuál sería más significativa desde su punto de vista (el de su organización)?
- ¿Qué luces visualiza en el diálogo entre científicos, técnicos y activistas en la defensa territorial y medioambiental?
- Si este diálogo ha sido poco nutrido ¿Cuales vías le parecen más plausibles para que este diálogo aporte realmente a las luchas territoriales y medioambientales?
- ¿Qué riesgos identifica ud. si esta propuesta no cuenta con un proceso participativo amplio?
- ¿Le gustaría resaltar algún aspecto de las otras presentaciones en su trabajo y organización?

Patricio Segura, representando a la Consejo Defensa de la Patagonia, posicionó la ciudadanía en las discusiones sobre impactos ambientales y expuso la importancia de la politización en los procesos de toma de decisiones. Reconoció que los conocimientos científico/técnico no necesariamente debían ser sitial predominante para acercar al ser humano y sus ecosistemas. *“No hay que ser astrónomo para ver las estrellas”*, expuso. Arengó a la audiencia a no desestimar la dimensión política en los temas de investigación. Reconoció que en Aysén y los ciudadanos en general estamos obligados a aprender de los impactos ambientales, frente a un sistema de evaluación de impacto ambiental cooptado por intereses empresariales. Las decisiones son políticas, sobre qué se investiga, son visiones de sociedad. A la vez Patricio destacó la posibilidad de realizar trabajos muy rigurosos de alta calidad, sin ocultar los puntos de vista propios. Finalmente el activismo puede ser concebido simétricamente, tanto por los que proponen, como los que resisten. Llamó a que los científicos y expertos a que bajen de su pedestal, que tomen una posición menos arrogante acerca de otras formas de conocer. Por otro lado expuso la necesidad de transformar el paradigma individualista, basado en el éxito y el extractivo de los recursos naturales. Instó a la audiencia a dejar la cuantificación de los eventos para inmiscuirse de corazón en lo que uno hace. En el fondo, poner a disposición los conocimientos y técnicas propias para la transformación de la sociedad en los ámbitos que se considera deben ser modificados. Eso, finalizó Patricio, es activismo.

Francisco Cabrera, como presidente de la Asociación de Funcionarios del Sistema Evaluación Ambiental (AFUSEA), reconoció su presencia como un hecho político que representa la intención del mundo sindical de abrir espacios de diálogo con las organizaciones sociales y medioambientales, de establecer redes de contacto, tanto desde el Sistema de Evaluación Ambiental como la Superintendencia de Medio ambiente. Primero destacó que los sindicatos están trabajando para transitar desde lo reivindicativo a lo propositivo. Incluso a presentar opiniones en temas sensibles para la comunidad. Frente a la primera pregunta planteada a la mesa Francisco destacó que un juicio al SEA

dependerá del contexto. Considerando SEA chileno reconoció cierta violencia particularmente en cómo se llega a las comunidades, como se evalúan los proyectos, como se vulneran derechos, sin embargo también destacó las contribuciones en torno a la ley de transparencia y la participación ciudadana. Ahora bien para Cabrera se mantendrá una posición débil toda vez que la Participación Ciudadana sea considerada predominantemente una aplicación metodológica y los proyectos evaluados sean proyectos de inversión y no proyectos socio-ambientales. Un sistema creado en los noventa con los partidos de la concertación como una participación “en la medida de lo posible”. Considerando el contexto actual con todo el empoderamiento de la ciudadanía el SEA estaría quedando atrasado.

Asimismo se refirió particularmente a las sombras de este diálogo entre activistas, sector público y evaluadores medioambientales. Gran parte de ellas Francisco las situó en la historia centralista del Estado chileno. Los criterios y delimitamientos van hacia las regiones y no al revés. Desde arriba hacia abajo. Estructuralmente también existe una brecha epistemológica entre las ciencias naturales y las sociales, que viene desde la academia. Existe poca valoración del conocimiento cotidiano, del conocimiento vulgar, de sentido común. En este entendido los criterios de racionalidad están dados por la ciencia. Además destacó instancias como éstas donde se avance en la transparencia, la comunicación y el diálogo, desde posturas que permitan rescatar las diferencias para poder llegar a acuerdos. De aquí rescató como parte de las luces la posibilidad de hacer propuestas, perdiendo el miedo a la autoridad, por ejemplo, desde el mundo sindical.

Indicó también el valor de entregar más atribuciones a las asambleas territoriales y no sólo provocar marchas sino que también sorprender a las autoridades con propuestas. Tomando en cuenta que en este camino no existen recetas y que habrá que avanzar en términos de ensayo y error, planificar con lo resultante del proceso mismo. Sin dar necesariamente por supuesto que el capitalismo está muerto, sí le pareció necesario ir reconociendo las evidencias de un cambio paradigmático. Por último y con respecto a la actual Comisión Presidencial para la modificación del SEA Francisco reconoció que habrían entregado una propuesta sindical crítica a esta comisión. Lo más preocupante aún es que las autoridades carecen de una visión acerca de las ventajas que organizaciones y trabajadores públicos hayan sido considerados a participar de estas mesas en calidad de miembros y no sólo expositores.

Isabella Monsó, como representante del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (MODEMA) de la región de Coquimbo, sistematizó las preguntas en tres partes y se situó en una red activista de la región, la cual estaría siempre en conflicto en territorios rurales. Reconoció también que entre las personas rurales y los científicos comparten cierta precariedad sólo por el hecho de convivir en un territorio particular. Para ella son los últimos en la fila de los presupuestos nacionales. Carecemos de espacios de diálogo y encuentro también por los escasos recursos con los cuales contamos, esto hace vulnerable a los científicos abocados al conservacionismo, porque deben exponerse a los intereses de aquellas empresas que sí los pueden financiar.

Aunque existe una falta de educación cívica, Isabella destacó el rol sorpresivo y creativo del activismo. La capacidad de unirse y articularse surge, según ella, en función de reaccionar a algo que está en contra de los principios de la comunidad. Surgen de pronto muchas formas de articularse, de improvisar en el camino acerca de cómo hacer las cosas.

La legalidad y los procedimientos administrativos van uniendo a activistas y científicos. El SEA obliga a las comunidades a traducir todo ese mundo en aspectos científicos y técnicos, por ejemplo, para realizar observaciones ciudadanas. El lenguaje coloquial aquí es descartado. Esto asume una definición de democracia y medio ambiente que reduce visiones de mundo y a las personas en sí. Así las comunidades estamos tan vulnerables y necesitamos tanto de los científicos. Los argumentos científicos, y no los emocionales, culturales, son válidos para llevar adelante procesos de judicialización.

Isabella quiso destacar los límites de lo compensable. Y con ello destacó que las estrategias de responsabilidad social empresarial instalan construcciones que no compensan los daños ambientales que causan.

Adelantó que MODEMA entre contiendas y a modo de propuestas está documentando los procesos de luchas llevados a cabo. Isabella mencionó la importancia de la gestión cultural rural, además de la vinculación con el estudiantado científico en distintas iniciativas, como tesis de grado.

Y por último referida a la Comisión Presidencial para mejorar el SEA concuerda en el sinsentido de invitar a los regulados para que se regulen. Llamó a la academia a unirse a propuestas ciudadanas para la mejora del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Dra. **Ana María Vara**, en su presentación “Los muchos modos de no saber”, propuso abordar un aspecto específico, que ella considera que puede hacerse desde las ciencias sociales en este encuentro, que tiene que ver con la sociología de la ignorancia. Desde los años setenta se ha realizado una reflexión sistemática y rica en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología sobre las controversias técnico-ambientales en los países centrales. Uno de los conceptos desarrollados es la noción de “ciencia no hecha”: se trata de la sistemática no producción de conocimiento. Esta noción propone que la producción de conocimiento descansa en los presupuestos culturales y los intereses materiales de grupos privilegiados, lo cual implica que hay conocimientos que no se desarrollan; en especial, en las controversias técnico-ambientales, aquellos conocimientos que podrían ayudar a los movimientos sociales que se sienten afectados por determinada tecnología o proyecto, a justificar sus reservas o temores (Frickel et al. 2010).

A partir de la noción de “la ciencia no hecha”, Ana María despliega tres teorizaciones realizadas desde la sociología de la ignorancia para ayudar a pensar la cuestión de la no-producción de conocimiento, que puede ser deliberada o involuntaria. Rescatando los aportes de Beck y Wehling (2012), Ana María propone problematizar en el análisis de las controversias, si se reconocen abiertamente o se niegan rutinariamente ciertas ignorancias, es decir, cierta falta de conocimientos.

En este sentido, puede decirse que el conocimiento científico llega a un límite, porque no estarían involucrados sólo aquellos riesgos que no podemos estimar completamente, sino también aquellas consecuencias absolutamente imprevistas—y, hasta cierto punto, imprevisibles—que son también resultado de decisiones humanas. Por ejemplo, el cambio climático o el agujero de ozono. Era imprevisible que la acumulación en la atmósfera de un gas inocuo y hasta favorable para la vida como es el dióxido de carbono, pudiera contribuir de manera decisiva a una transformación de proporciones globales como es el cambio climático. Algo similar con los CFSs, que son moléculas poco reactivas y relativamente pesadas: nada hacía prever que podrían alcanzar las capas altas de la atmósfera y contribuir a degradar las moléculas de ozono. De aquí que sea necesaria la politización de las decisiones científico-tecnológicas, debido a que los expertos no pueden agotar el análisis de las consecuencias de una nueva tecnología de modo previo a su implementación: hay un margen de incertidumbre que demanda la intervención de otros actores sociales para legitimar las decisiones.

Otra pregunta se vincula con la intencionalidad del no saber. Por lo general los activistas promueven la visibilización de ese no saber, y de aquí surge el principio precautorio; en cambio los promotores de las tecnologías suelen apoyar la idea de que las brechas de conocimiento son especificables, es decir, que se las puede identificar claramente, y que pueden superarse.

Para cuestionar la presunta neutralidad de la ignorancia Robert Proctor (2008), aportando otra teorización, reconoce en la agnotología, es decir, el estudio de la ignorancia, una historicidad y artefactualidad del no saber y de lo no sabido. Para ello identifica distintos tipos de ignorancia. Habla de una ignorancia “deseable”, es decir, conocimientos que sería pernicioso desarrollar o conservar, y da como ejemplo la posibilidad de clonar a un ser humano, o el conocimiento para torturas. Aquí habría principios o valores morales detrás de esta deliberada no construcción de conocimiento. Otro tipo de ignorancia es la debida a una construcción activa de no conocimiento en función de determinados intereses, con el ejemplo de cómo la industria tabacalera norteamericana buscó desdibujar los indicios que vinculaban al cigarrillo con el cáncer de pulmón, apuntando a otras posibles causas, para defender su producto.

Esta línea se fortalece con los aportes de Mathias Gross (2010), quien reconoce un abanico de posibilidades, entre la nescience, o carencia de todo conocimiento (que puede dar origen a la sorpresa); al no conocimiento (non-

knowledge), que es aquel conocimiento que se reconoce que no se tiene. También presenta la categoría de conocimiento negativo (negative knowledge), que es aquél que podría afectar determinados intereses. Y, por último, habla del nuevo conocimiento extendido (extended (new) knowledge). Aquí Ana María se cuestiona la construcción activa de la ignorancia en determinadas controversias técnico-ambientales. Por ejemplo, en el caso de la pastera de Gualaguaychú donde parecía ser mejor no producir y dar a conocer, por parte de los promotores, los datos acerca del consumo de agua y energía de estas infraestructuras. La mayor de ellas requería de una inversión de 1200 millones de dólares sólo para 300 puestos de trabajo directo.

Volviendo a la ciencia no hecha, aquella necesaria para que los movimientos sociales cuestionen proyectos determinados, puede acontecer, retomando a Beck y Wehling (2012) debido a la (falta de) conciencia del no saber, a la intencionalidad del no-saber y la temporalidad o persistencia de ese no-saber. Como contrapartida, Proctor (2010) permite reconocer los modos en que se desmarca el conocimiento nativo, como conocimiento olvidado, al menospreciarse el conocimiento local, el del baqueano, además de la construcción activa de la ignorancia.

Finalmente Ana María retorna a Gross para admitir cómo el reclamo de los movimientos sociales puede convertir un conocimiento considerado negativo (y, por lo tanto, no producido), en lo que llama no conocimiento (non-knowledge, aquello que reconocemos que no sabemos), y que nos lleva entonces a investigar sobre eso. Así, se lo incluye en planes de investigación, y entonces se va transformando en extended knowledge, en un nuevo conocimiento. Para ejemplificar esta dinámica, Ana María utilizó el caso de las investigaciones producidas en la Argentina por distintos grupos de científicos enrolados por los movimientos sociales que se oponen a la soja transgénica y a las fumigaciones con agroquímicos que acompañan a este cultivo. Esas investigaciones contribuyeron a hacer visibles los impactos en la salud y el ambiente de estas tecnologías, impactos que en principio habían sido negados o considerados insignificantes por los promotores de las tecnologías.

Intervención Senado Antonio Horvath. Los proyectos resultan ser trajes a la medida para las empresas, y esto aún no lo podemos superar. Toda vez que se realicen modificaciones a ley de base del MA. Falta un registro de consultores independientes al cual se pueda acceder y puedan acceder también las comunidades afectadas. Las comunidades por lo general se afirman en las ONGs en las comunidades vinculadas a las universidades, pero obviamente hay un desbalance en el medio que es muy significativo.

Si se está pensando en los usos de los territorios se requieren una mínima visión de planificación estratégica. Si vienen estos proyectos muchas veces no calzan ni con las comunidades, ni con sus ideas de desarrollo, etc. Sería apropiado tener claras las alternativas, incluso ante la opción de no hacer nada y conservar. Finalmente hacemos un llamado a los ciudadanos, a los activistas que realicen sus acciones. Aunque normalmente esta participación baja si los consultan pero finalmente no ven un resultado en las decisiones. Eso lleva a frustración ciudadana. Aquí estamos frente a personas que han trabajado frente a mega proyectos y así y todo la participación ciudadana ha llevado a efectos trascendentes en lo referente a tomar consciencia, a llamar a la planificación, a los proyectos alternativos, y finalmente cuando se terminan judicializando, porque como no hay planificación, casi todos los proyectos se terminan judicializando, los elementos de la participación ciudadana juegan un rol hasta el final. Lo vemos en los tribunales ambientales para el caso del proyecto Hidroaysén, ícono en nuestro país, en el cual las participaciones ciudadanas, por muy pequeñas que hayan sido, cuando no fueron consideradas por los servicios con competencias en el área, o por los tribunales o incluso la corte suprema, todavía tienen relevancia en los tribunales ambientales. Eso lo hemos visto, así que es bueno que eso no se inhiba.

Entre oponerse un proyecto y presentar una alternativa, esta última es la opción que En cuanto al acceso a la información, Antonio reconoció el valor de internet como una verdadera revolución, que llega a poner luz en la sombra.

El modelo de desarrollo es centralista en Chile, mundialmente capitalista en lo económico. Eso sería necesario tomarlo en cuenta, toda vez que existe toda una propaganda que tiende a obnubilarlos, donde nuestra capacidad de tener sensación baja. Los estímulos constantes bajan la opción de tener consciencia sobre otros hechos.

En referencia al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo escuchando al ministro de energía: cumple con todas los presupuestos legales. Obvio que cumple, sino sería ilegal, no podría llegar a hacerse. Pero todo el trabajo no se ha hecho, la participación ciudadana, el manejo integrado de cuencas, etc. no se ha hecho.

Además entre las universidades, hay universidades y universidades. El senador recordó los casos de desacuerdos en informes entre una universidad y un tribunal sobre la contaminación de la celulosa Arauco y el caso de Barrancones donde en una misma universidad se disputaron visiones distintas para concretar un informe de evaluación integral. Entonces cuando la ciudadanía logra acceder a eso, logra generar ese quiebre. Si no pasase eso, estaríamos peor de lo que estamos.

Les agradezco la invitación y en nombre del centro de extensión del senado, les solicito si cuentan con conclusiones, nos las hagan saber.

Preguntas del público.

Colombina: ¿Cómo funcionarios públicos que rol le dan a la incertidumbre en el SEA?

Catalina: Con respecto a los límites de lo compensable, me gustaría saber cuál es la decisión de la dirección ejecutiva del SEA respecto a las guías metodológicas en las EIAs. El año pasado se sacó una guía que proponía como debían hacerse las compensaciones acerca de la biodiversidad y esta guía tomó un carácter indicativo, cuando el SEA tiene la capacidad de instalar guías con carácter vinculante. Si existe un acuerdo en que las compensaciones en biodiversidad no son de buena calidad, porque el SEA no toma este brazo de hacer una normativa vinculante dentro de la administración para los regulados, en cambio lo guarda dando esta guía que es sólo indicativa. Sabiendo que las compensaciones en biodiversidad son caras, las empresas no están dispuestas a realizarlas, además que todas las materias sustantivas en biodiversidad en el parlamento siempre se han demorado mucho, por ejemplo, el Servicio de Diversidad Ambiental, que todavía se está tramitando.

El registro de las especies encontradas pasan los profesionales sectoriales no priman sobre las especies mencionadas por las empresas en sus Estudios de Impacto Ambiental.

Francisco asumiendo su desconocimiento técnico específico, sí reconoció que las guías metodológicas están siendo solamente indicativas. Hay una intención de la autoridad de no zanjar ese problema. Aunque estas guías están siendo tomadas por los proponentes, efectivamente están siendo sólo indicativas.

El mismo para contestar a Colombina sí reconoce que los evaluadores conversan entre ellos. “Conversamos mucho a nivel de pasillos en cuanto a los proyectos”. Sin embargo la autoridad es la que resuelve los caminos. Por ejemplo, el proyecto Andina 244 que está en proceso hay opiniones diferentes. La caja negra debería ser mucho más transparente. Mucho más llana, más fácil para las comunidades. Aquí hay un proceso que no está sorteado, está en disputa. Ese es el estrés a que los evaluadores se ven enfrentados. Cuando se tienen antecedentes que técnicamente no deberían ser aprobados y sin embargo la autoridad por razones políticas sí lo hace. Yo no digo que no tienen que haber aspectos políticos en las decisiones, el problema surge cuando autoridad política se escuda en opiniones técnicas, cuando realmente no proviene de resultados particulares. El problema es que ellos se hagan cargo de sus posturas políticas.

Isabella comparte los problemas, por ejemplo, de un funcionario de CONAF, quien no podía poner en evidencia cuáles especies no estaban tomadas en consideración, por el simple hecho que estas no estaban consideradas en el estudio de impacto presentado por la empresa.

Patricio reconoce que en HidroAysén la solicitud del ICSARA desde agosto a noviembre de 2008 se tuvo la posibilidad de recurrir al artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual alude a EIAs que carecen de información esencial y relevante para ser evaluados. Así podría haberse rechazado como se rechazó el proyecto de Río Cuervo original (presentado y rechazado entre enero y marzo de 2007).

Sin embargo, se ingresó el EIA de HA, se envió emití un ICSARA cuando podría haberse rechazado y se decidió permitirle su avance y tramitación. Para justificar esta decisión se dieron muchas justificaciones, no obstante, cuando los informes técnicos reconocieron la ilegalidad de inundar el Parque Nacional Laguna San Rafael el cariz de las discusiones cambió. Patricio recuerda que gestionó que se publicara una nota en el diario la Segunda, el cual tituló con las “carencias e ilegalidades del proyecto”. Eso tuvo todo un impacto y generó una controversia. “Habíamos avanzado en instalar que el proyecto era un mal proyecto”. Al final, y en el fondo, es una pelea política. Más allá del tema técnico. Después de 6-7 años logramos instalar que era un proyecto malo. Que le faltaba información, que había conflictos de interés. Nosotros fuimos los primeros en instalar el concepto de “ideológicamente falso”. Materialmente informes eran verdaderos: firmados, certificados pero ideológicamente falsos porque no se basaban en los antecedentes y en los informes originales de los evaluadores. Posteriormente solicitamos por Ley de Transparencia todos los antecedentes que daban pie para esos informes. Allí contrastamos la información y nos percatamos que los informes habían sido cambiados. Después fuimos a los tribunales. Así se construye la realidad, en base a eso, de una discusión política. Utilicemos la ley, usemos todo, porque la construcción de sociedad está en juego. ¿Cómo discutes sobre el arraigo? ¿Cuánto vale tu arraigo? ¿Cuánto vale tu parque Nacional Laguna San Rafael, parecía que nos decían? Ponle precio, nos planteaban. Ahí les decíamos... “sabe Ud. aunque no hay dinero que pueda pagarlo y aunque le cueste entender, hay cosas que no tienen precio”. Y ahí no sé cómo podríamos discutir sobre eso.

Ana María para dar respuesta a la pregunta acerca de ¿cómo hacemos para terminar esto? Trajo a colación a Charles Tilly y su propuesta en la relación y dinámica entre la política representativa y la política contenciosa para las sociedades occidentales, u occidentalizadas como las nuestras. El derecho a voto se fue ampliando gracias a la política contenciosa. Ana María reconoce que es tan dinámica la relación entre ambas que todavía hoy se sigue hablando del derecho a voto en Argentina. De hecho se bajó la edad de voto de los 18 a los 16 años voluntariamente. También se está discutiendo si acaso los ciudadanos que están en el país pueden votar. O los ciudadanos con doble ciudadanía, por ejemplo, entre italianos y argentinos ya son tantos que influyen en las votaciones de ambos países.

El ejemplo de la tecnología nuclear en la Argentina. Cuando yo hablo de las controversias sobre la tecnología nuclear, algunos me dicen que aquella no existe. Ella se extraña porque habría que considerar porqué en la constitución argentina aparece la palabra “radioactivo”. En los años 80 los proyectos nucleares que venían planificándose antes de la dictadura. Uno de los proyectos que no terminó realizándose fue un repositorio nuclear en la Patagonia gracias a una movilización al comienzo de la democracia. Algunas personas que se movilaron en ese momento posteriormente lo hicieron al momento de votar la constitución en el año 94 y lograron zanjar esta cláusula que prohíbe el ingreso a la Argentina de residuos varios y... radioactivos. Así como hay una cláusula en Ecuador que menciona a los transgénicos, tan específica. Los activistas le llaman a eso la cláusula lastre.

Estas cláusulas Ana María alerta acerca de su posibilidad de abrir ventanas de oportunidad para instalar posteriores reclamos. Eso se usó en el año 2000 para cuestionar tratos con Australia para que eventualmente pudiesen tratarse los residuos en Argentina. Cuando los países quieren resolver dónde ponen sus residuos y no tienen territorios con las características geológicas para realizarlo empiezan a mirar qué países sí las tienen. Al menos las empresas y la diplomacia nuclear no podría sentarse a discutir este punto porque está en nuestra constitución.

Segunda ronda de preguntas.

Michell: Frente a las reticencias de algunos científicos, y frente a algunos científicos que tienen doble militancia entre la universidad y las empresas, ¿cómo conciben este acercamiento entre activistas y expertos?

Asistente: Como matriz energética es concebida como bien de mercado, mientras que en otros lados se ha considerado como un derecho. El argumento ha sido el de acoplar la matriz energética con el PIB. Si crecemos a 5% al año en 10 años deberíamos duplicar la oferta energética. Habrá otra opción de crecer en una matriz energética de una manera más solidaria.

Karin, estudiante de quinto año de administración pública de la Universidad de Chile, reclamo que en su institución no le permitían hacer prácticas, ni en gobiernos regionales, ni en organizaciones como la CEPAL, o la FAO, porque necesariamente deben coincidir con un servicio público. Declaró que resultaba aberrante porque lo público también es lo no estatal. ¿Qué pasa si quiero trabajar en una ONG o me interesan este tipo de temáticas?

En nuestro país como vemos existe un consenso en que el centralismo es claro, ahora en países muy neoliberales se sabe que no se puede sólo mantener mano de obra barata sino que hay que invertir en ciencia y tecnología, que hay que invertir en innovación, que hay que descentralizar, que hay que fomentar el desarrollo local. Mientras que en Chile la concentración del mercado sigue obstaculizando y sus miembros serán los que siguen manipulando como títeres a las autoridades.

Paola: Sobre las simetrías entre ciencia y activismo. Los medios de comunicación y sus efectos en los activistas y por otro lado en la línea de lo político y la toma de decisiones.

Isabella: Para MODEMA es la educación cívica la respuesta para unir expertos y activistas. Vinculación con universidades y centros de investigación.

Espacios como estos dan la posibilidad de realizar intercambios de opiniones, salir de los prejuicios, que también provienen desde el sector público hacia las organizaciones y viceversa. Yo no veo otros lugares más que estos espacios para romper este aislamiento que se produce de forma mutua.

Patricio: el hecho de ser ciudadano, no anormal, sino radical. Nos acusan de radicales, cuando el sistema en que vivimos es el radical (agua privatizada, previsión social basado en capitalización individual, el peor índice de Gini, por citar unos ejemplos). Lo que estamos haciendo es volver este sistema radical a su centro, que en el fondo es ganar el sentido común. Y para ello necesitamos mucha gente, incluidos jóvenes profesionales que se están formando. Pero claro, tienen que hacer opciones. Si quieren tener un auto caro, viajar una vez al año por Europa, tener casa en la playa, lo más probable es que deban trabajar para una transnacional o un gran bufete de abogados. Porque la dependencia material nos hace esclavos, al final, y no podemos avanzar en lo que creemos. Para ganar libertad hay que tener menos dependencia material. Más aún, en una sociedad con derechos sociales garantizados, la gente no deberá permitir que afecten su calidad de vida, su medioambiente, para tener educación, vivienda, salud digna, porque eso ya lo tendría. Así, disminuimos el clientelismo empresarial y político.

Isabella: En MODEMA trabajamos con la SEREMIA de Agricultura sobre los planes de desarrollo rural. Economías tradicionales. Atraer recursos para fortalecer estos planes de desarrollo.

Patricio: Del lado de la opción por una Asamblea Constituyente, que hay que hacer cambios de fondo, de paradigma. Por ejemplo reconocer que crecer no siempre es bueno. Cambiar esa mirada de que lo artificial, inmenso es precioso. Pero la naturaleza con su pequeñez y naturalidad también lo es. La energía no puede ser sólo un negocio, sino debe ser un derecho. Yo creo en la soberanía energética, creo en la matriz distribuida. Esta ley del *net metering* donde las empresas presionan y presionan para que si inyectas electricidad a la red te pagan la mitad. Tenemos que distribuir la riqueza energética, tenemos que crear soberanía y sustentación energética. Tenemos que disminuir el consumo. El megawatt más barato es el que no se consume.

Francisco: Existe capacidad y competencia de los funcionarios de todo el país. Existe mucha experiencia. Lo que falta es una dotación suficiente. El estado no ha dado los recursos para que un evaluador se preocupe de un estudio de un megaproyecto. Ese evaluador termina estresado, con licencia médica al final del día. Para resolver este problema de los conflictos de interés, yo creo que el registro de consultores es una medida buena que ha estado relegada.

Parece que estamos de acuerdo con el senador Horvath en los temas puntuales. El problema es la decisión política entre los distintos intereses para solucionar estos temas.

Ana María: Beck y Wehling hablaban eventualmente de la intencionalidad del no saber. En relación con energía en un encuentro del 2010 sobre cambio climático y energías alternativas, un expositor de una ONG internacional

presentaba los datos para distintos sectores sociales para reducir el consumo de energía, por ejemplo, para las maestras, para los consumidores residenciales, etc. Ella recordó que le preguntó al especialista si acaso en su documento ¿se incluían recomendaciones para las mineras?...no. Las mineras consumen una cantidad enorme de energía. Añadió que el expositor internacional dijo que los países en desarrollo no habían logrado desacoplar las curvas entre consumo de energía y PIB, mientras los países desarrollados sí. Por supuesto, así comentó Ana María... “nosotros los países en desarrollo somos los perfectos idiotas de la historia, no?” No podríamos crecer sin consumir más energía.

Ana María se preguntaba si había alguna rama de los estudios de Naciones Unidas que estuviesen trabajando en los vínculos entre consumo de agua, consumo de energía y trabajos generados. No. Ella reconocía que si tuviésemos esos estudios habrían industrias que no las podríamos promover. Se sabe que los países desarrollados lograron deslocalizar sus industrias energo_intensivas a los países en desarrollo. El hecho de que nosotros no podamos desacoplar nuestras curvas de consumo energético y crecimiento económico tiene que ver con los planes de otros sobre nosotros. Ejemplificando con las industrias de latas de aluminio, Ana María alerta sobre la contabilización de esos consumos. Como en Argentina se produce el aluminio, entonces nosotros producimos más energía, pero en realidad donde se consumen bienes es en los países centrales y esto, insistió, no ocurrió naturalmente.